

A continuación se presenta una síntesis de los capítulos ley Nacional 27.328.

- Capítulo I. De los contratos de participación público-privado.

Entre el artículo 1 y el 11 quedan definidos los contratos de participación público-privada, como modalidad alternativa de contratación a las reguladas por las leyes 13.064 y 17.520. Se los define en su articulado, como una forma flexible, adaptada a las necesidades de cada proyecto, destinada a satisfacer objetivos de interés público, celebrados entre entes que integran el sector público nacional y sujetos privados o públicos, con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica.

Queda establecido en estos artículos que los proyectos incluidos en el marco de la ley podrán tener como objeto una o más actividades de diseño, construcción, ampliación, mejora, etc., explotación u operación y financiamiento, siempre que previamente se determine que la modalidad PPP permite cumplir con los objetivos de interés público tendientes a satisfacer con los mismos.

- Capítulo II De los procedimientos de selección.

Entre los artículos 12 y 17 se fijan los procedimientos de selección (licitación o concurso, nacional o internacional), las condiciones que se deben cumplir previo al llamado a licitación o concurso público, los mecanismos de adjudicación, las autorizaciones presupuestarias necesarias. Se prevé el caso sobre el compromiso de recursos presentes o futuros del presupuesto público, estableciéndose que dichos procedimientos y los contratos celebrados en el marco de la ley deben ser compatibles con los procedimientos de la iniciativa privada.

- Capítulo III. De las Obligaciones de Pago.

Los artículos 18 y 20, refieren a las obligaciones de pagos y garantías. Estableciendo que las obligaciones de pago asumidas por el contratante en el marco de la ley podrán ser solventadas y garantizadas mediante: la afectación específica de recurso tributario, créditos, bienes, fondos, etc. En la totalidad de sus casos se debe contar con autorización del Congreso de la Nación; la creación de Fideicomisos, el otorgamiento de fianzas, avales, garantías, etc., además que se podrán constituir garantías sobre los derechos de explotación de los bienes del dominio público o privado concedidos al contratista para garantizar el repago.

- Capítulo IV Regulación y Control de la Ejecución del contrato.

Los artículos 21 y 22 refieren a la regulación y control de la ejecución del contrato, marcando como indelegables las funciones de regulación y poder de policía del

Estado. Establecen que la parte contratante tiene amplias facultades en ese marco, pudiendo acudir a auditores externos para controlar la ejecución de los proyectos. Pero más allá de las amplias facultades que señala, queda expresamente establecido que la Auditoría General de Nación deberá incluir en su plan anual a la totalidad de los contratos suscriptos bajo la modalidad PPP.

Las bases de cada contratación podrán prever la constitución de una sociedad de propósito específico, de fideicomisos u otros tipos de esquemas asociativos, los que tendrán a su cargo la suscripción y ejecución de los contratos suscriptos bajo el régimen PPP.

En este primer capítulo quedan establecidas también un conjunto de previsiones que deberán contener los contratos suscriptos en el marco de la ley, referidas entre otras cuestiones a: plazo, reparto de aportes y riesgos, obligaciones de las partes, mecanismos de control, formas y modalidades de pago, aportes de los contratantes, garantías, etc.

- Capítulo V Incompatibilidades para contratar.

El artículo 23 refiere a las incompatibilidades para contratar bajo el régimen de la ley. Establece, en forma detallada una enumeración de quienes no podrán asumir la condición de oferentes o contratantes, ni ser miembros de sociedades oferentes, ni subcontratista de estas por; carecer de capacidad para contratar con el Estado; por haber participado como asesores de la parte contratante; por ser funcionario de la misma; por estar sujeto a procesos concursales o de quiebra; por haber sufrido sanciones por violación a normas ambientales; por ser deudores de créditos impositivos y/o previsionales o por encontrarse en situación de procesado, con auto de procesamiento firme.

- Capítulo VI Anticorrupción.

El artículo 24 establece que más allá de lo pautado por la normativa general en materia anticorrupción, será causal de rechazo sin más trámite, dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a funcionarios o empleados con competencia en cualquier etapa del procedimiento instaurado por la ley PPP.

Además, de manera complementaria queda normado explícitamente que las consecuencias de las conductas ilícitas mencionadas se producirán con la sola tentativa.

- Capítulo VII Solución de controversias.

En los artículos 25 a 27 la ley trata sobre la resolución de controversia en el marco de los contratos que regula. Estableciendo la posibilidad de fijar en el marco de

cada contrato mecanismos de avenimiento y/o arbitraje. No obstante, expresamente hace la salvedad de que cuando el arbitraje signifique prórroga de jurisdicción, requerirá aprobación expresa del Poder Ejecutivo y comunicación por parte de éste al Congreso de la Nación, mediante los mecanismos que la misma ley establece.

- Capítulo VIII Unidad de participación Público-privada.

En los artículos 28 y 29 se hace una delegación en el Poder Ejecutivo de facultades para la creación de la Unidad de participación público-privada. Esta será quien tenga a su cargo la centralización normativa de los contratos regidos por la ley, además de prestar apoyo consultivo, operativo y técnico a los organismos contratantes en las diversas etapas de los contratos PPP. Debiendo dicha Unidad instrumentar un sitio específico de consulta pública y gratuita de internet para la difusión de todos los actos administrativos, informes, contratos, auditorias, etc. que se desarrollen en el marco de la ley.

- Capítulo IX Comisión bicameral de seguimiento de los contratos de participación público-privado.

En el artículo 30 se crea una Comisión bicameral de seguimiento de los contratos PPP. La misma estará integrada por siete senadores y siete diputados, siendo ella la que establecerá su estructura y forma de funcionamiento. Esta Comisión tendrá acceso a toda la documentación referida a los procesos y contratos realizados en el marco de la ley, debiendo el titular de la Unidad PPP concurrir anualmente a dicha Comisión a fines de brindar un informe del estado de los proyectos PPP.

- Capítulo X. Disposiciones generales y transitorias.

Se establece en el artículo 33, la invitación a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen de Propiedad Público-privada estatuido en la ley.

La ley fue sucesivamente reglamentada a través de los dec. 118/2017; (anexo 2); 936/2017 (Anexo 3) y 944/2017 (Anexo 4). Mediante el primero de ellos se crea la Unidad de Participación Público-Privado, en el ámbito del Ministerio de Finanzas, con todas las funciones establecidas en los art. 28 y 29 de la ley, explicitadas en el anexo I, de dicha norma.

Con fecha 6 de octubre de 2017, mediante el art 10 del dec. 808/2017 (Anexo 5) pasa con las mismas funciones a denominarse Subsecretaría de Participación Público-Privada, como continuadora de la Unidad ya existente.